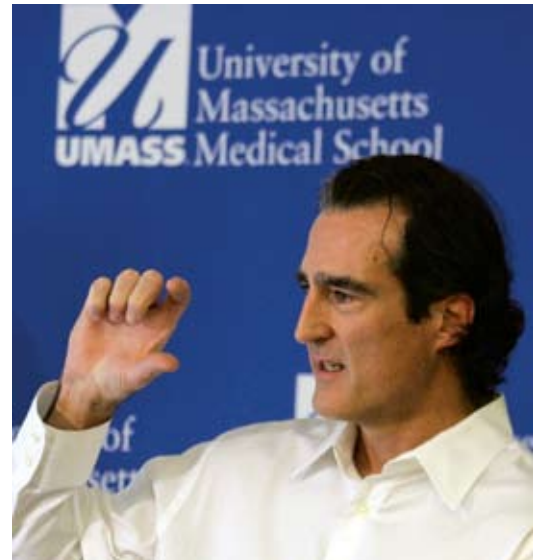


El sistema universitario estadounidense ha dado muchos ganadores del Premio Nobel. Craig Mello, a la derecha, y su colega Andrew Fire recibieron el Premio Nobel de Medicina en 2006 por una investigación en el campo de la genética y su posible aplicación en el tratamiento del sida y el cáncer.



REUTERS/JESSICA RINALDI

Treinta por ciento de la población cuenta con un título de licenciatura

Los mayores índices de éxito a nivel mundial ocultan el gran número de desertores

POR ARTHUR M. HAUPTMAN

EMPEZANDO POR LA CREACIÓN DE HARVARD EN 1636, la mayoría de las primeras universidades de los Estados Unidos fueron privadas. A lo largo de la historia, tanto el número de instituciones públicas del país como su campo de acción han aumentado en forma notable. En 1787, la nueva Constitución de los Estados Unidos otorgó a los estados la responsabilidad sobre las funciones internas de mayor relevancia, incluyendo la educación. Esto ha significado que prácticamente todas estas instituciones públicas de educación superior —aquellas cuya fuente principal de financiamiento procede de los contribuyentes y son administradas fundamentalmente por autoridades públicas— se encuentren regidas por la administración estatal o local.

El sistema creció en oleadas

Una ley federal promulgada en 1862 fomentó la creación de universidades en terrenos cedidos por la federación (*land-grant universities*) en casi todos los estados. Después de la Segunda Guerra Mundial, se establecieron o expandieron muchas instituciones públicas que ofrecían cursos de cuatro años para atender a una población en rápido aumento. Además, en 1947, el informe de una comisión auspiciada por la federación estimuló la creación de colegios comunitarios. Actualmente, estas instituciones representan más de la tercera parte de la matrícula total. Hoy en día tres cuartas partes de los estudiantes en colegios de educación superior se inscriben en instituciones públicas.

Para financiar estas instituciones públicas, los gobiernos intervinieron a través del financiamiento de operaciones básicas —incluyendo la docencia y el apoyo a la investigación realizada en los recintos universitarios o en instalaciones auspiciadas por la institución— y proporcionando ayuda financiera a los estudiantes a través de subsidios, becas, préstamos y con oportunidades de tra-

bajar y estudiar simultáneamente. La responsabilidad de financiar la docencia y las operaciones básicas de las instituciones públicas recayó principalmente sobre los estados, mientras que la mayoría de los fondos para la investigación académica y para la ayuda económica al estudiantado procede del gobierno federal.

En los Estados Unidos, los impuestos estatales sobre la renta y sobre ventas, entre otros ingresos de base impositiva del ámbito estatal (como los fondos de la lotería), representan el principal apoyo de los contribuyentes a las instituciones públicas. En el periodo 2006-2007, los fondos estatales para este nivel educativo superaron los 70 mil millones de dólares estadounidenses, más de 0.5% del PIB. La mayoría de estos fondos provienen de estados individuales. En este país, el gasto total en educación superior, proveniente de las distintas fuentes de financiamiento, equivale a cerca de 3% del PIB: el nivel más alto de inversión en educación superior del mundo. Actualmente, el financiamiento del Estado por alumno de tiempo completo, o equivalente, asciende a casi 10 000 dólares estadounidenses.

SECCIÓN ESPECIAL

La educación superior



El aumento en cuotas incrementó los ingresos

El aumento de cuotas como proporción del ingreso total de las instituciones públicas es una de las tendencias más marcadas en las finanzas de la educación superior en los Estados Unidos y en otros

países en décadas recientes. Las cuotas cubren más de una tercera parte de las actividades educativas de las instituciones públicas de los Estados Unidos, a diferencia de 10% que representaban tres décadas atrás. Los estados dependen de estas cuotas de forma muy variable: entre 13% en Nuevo México y 77% en Vermont.

Muchos estudiantes recurren a los préstamos para pagar sus estudios. La ley de educación superior de 1965 estableció varios programas de ayuda financiera para estudiantes que actualmente constituyen la base de este tipo de apoyos en los Estados Unidos. Uno de esos programas, Préstamos Estudiantiles Garantizados representó un enfoque interesante en lo que al federalismo se refiere. En su momento, un grupo de doce dependencias gubernamentales fue el garante ante las entidades crediticias privadas por el riesgo de falta de pago de los préstamos otorgados a estudiantes sin garantías suficientes para obtenerlos. El programa federal de prés-

Arthur M. Hauptman es consultor de políticas públicas especializado en temas de financiamiento de educación superior, entre ellos, el financiamiento público a las instituciones, el establecimiento de cuotas y la ayuda financiera para estudiantes.

tamos garantizados, en conjunción con las dependencias estatales existentes, sirvió para que los estudiantes de estados en los que no hubiera dependencias que fungieran como fiadores solidarios pudieran ser sujetos de crédito. En la actualidad, la industria de préstamos a los estudiantes de los Estados Unidos otorga anualmente más de 100 mil millones de dólares estadounidenses en préstamos. La solicitud de préstamo promedio de un estudiante de licenciatura es de alrededor de 20 000 dólares estadounidenses y mucho mayor si el estudiante es de posgrado.

La investigación ha sido otra importante fuente de ingresos para las universidades. Tradicionalmente, la mayor parte del apoyo financiero para investigación en el campus —que abarca también a la realizada en los laboratorios federales— ha procedido del gobierno federal. En la actualidad, la asignación de recursos federales a la investigación académica asciende a alrededor de 30 mil millones de dólares estadounidenses. La mayor parte de este financiamiento federal se basa en los resultados de las revisiones entre pares de las propuestas.

La primera responsabilidad del gobierno federal no ha sido garantizar la calidad general sino garantizar que las miles de instituciones a las que asisten los millones de estudiantes que reciben ayuda a nivel federal cumplan con las condiciones mínimas requeridas, así como de que los impuestos de los contribuyentes se gasten de manera adecuada.

Los estudiantes de bajos ingresos no reciben ayuda

Con el fin de mejorar la eficiencia de los sistemas de educación superior, la Comisión sobre el Futuro de la Educación Superior Estadounidense, dependiente de la Secretaría de Educación de los Estados Unidos, publicó un informe en septiembre de 2006 en medio de una andanada de controversias. Uno de los temas centrales del informe de la Comisión fue el inadecuado funcionamiento del sistema de ayuda financiera a los estudiantes de los Estados Unidos debido a su excesiva complejidad, su falta de transparencia y a que no se enfocaba en satisfacer las necesidades de los estudiantes de más bajos ingresos.

El informe concluyó que a pesar de que los niveles de participación tradicionalmente han estado entre los más altos del mundo, la proporción de alumnos que completan el programa iniciado demuestra que el historial de los Estados Unidos ha sido mediocre porque sólo la mitad de los estudiantes completan un grado de cuatro años, y este promedio es mucho menor en los colegios comunitarios.

La atención que la Comisión prestó a los bajos índices de titulación ha desatado un creciente debate sobre un tema relacionado: el desempeño de los Estados Unidos en cuanto a los índices de egresión a nivel universitario (es decir, la proporción de la población en edad adulta que ha obtenido algún título de educación superior). A nivel licenciatura, los Estados Unidos sigue teniendo los índices de egresión más elevados con 30% de la población en edad adulta titulada en este nivel (el promedio de la OCDE es 19%), aun cuando varios países están a punto de alcanzarlo. Pero la proporción de titulación en grados asociados (título de enseñanza superior otorgado al final de dos años de estudios) otorgados por los colegios comunitarios es de alrededor de 10% de la población en edad adulta (el promedio de la OCDE es nueve por ciento) y ha colocado al país en la parte media del grupo. Si se combinan los índices de estos dos tipos de títulos y se analiza la tendencia de varios años, atendiendo a las diferencias que existen entre los diferentes grupos de edad, los Estados Unidos va a la zaga de muchos otros países.

Ahora es evidente que el defectuoso sistema de ayuda financiera a los estudiantes, la falta de éxito de los alumnos, y la necesidad de analizar qué aprenden los estudiantes y de elevar la calidad serán parte central del debate sobre educación en el futuro cercano. Desde luego que estos temas han sido ampliamente debatidos con anterioridad pero sin mayores resultados. Es posible que ahora, con la intensa atención prestada a la competencia global, se obtenga un resultado distinto. 